

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO PONENTE
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D. E. de C., T. e I.¹, nueve de junio de dos mil veintitrés

Radicación n°.	05001-31-03-011-2013-00719-01.
Proceso.	Verbal, pertenencia.
Demandante.	Martha Sierra Prada y otros.
Demandados.	Mercedes Vidal Marín e indeterminados.
Procedencia.	Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.
Decisión.	Confirma la sentencia apelada.
Temas.	De los requisitos de la usucapión extraordinaria y de la prueba de la posesión, cuando se busca la sumatoria de varios periodos de posesión.
Rdo. Interno	081-17
Sentencia n°.	024-23
Aprobación.	Proyecto discutido y aprobado en sesión virtual de Junio 09 de 2023.

I. ASUNTO A RESOLVER.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala a resolver la apelación interpuesta por los demandantes contra la sentencia de 12 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro del proceso verbal de pertenencia, promovido por Martha Lucía Sierra Prada, María Ester Prada de Sierra, Ester Eugenia Sierra Prada, Santiago Alberto Sierra, Jaime Agustín Sierra Prada y Ángela María Sierra Prada frente a Mercedes Marín Vidal y demás personas que consideraran tener derechos en los títulos, cuya pertenencia se reclama.

II. ANTECEDENTES.

1.- LA DEMANDA.

¹ Acto Legislativo 01 de 2021, art. 1º. "La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación."

1.1.- Lo pretendido. Mediante escrito presentado el 09 de agosto de 2013, los señores Martha Lucía Sierra Prada, María Ester Prada de Sierra, Ester Eugenia Sierra Prada, Santiago Alberto Sierra, Jaime Agustín Sierra Prada y Ángela María Sierra Prada demandaron a Mercedes Marín Vidal y a los demás sujetos que estimaran tener derechos en las 8000 acciones de la sociedad Cementos Argos S.A., vertidas en el título identificado con el número 0065396, para que, previo el trámite del proceso verbal de pertenencia, se les declarara propietarios de éstas, al haberlas adquirido por la vía de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.

Como consecuencia de lo anterior, reclamaron la inscripción del título en el libro de accionistas *“o en el registro automático que corresponda, así como copia de la sentencia ejecutoriada ante las autoridades competentes”*, y se ordene a Cementos Argos S.A. el pago de los dividendos retenidos hasta la fecha de registro referido (fl. 4, cuaderno principal, expediente físico).

1.2.- Los fundamentos fácticos. Contaron que el señor Francisco Eladio Sierra Madrid adquirió 8000 acciones de la empresa Cementos Argos S.A., representadas en el documento 0065396, las cuales, el 2 de julio de 1996, fueron vendidas a Mercedes Marín Vidal, aunque el vendedor se mantuvo en posesión de las acciones hasta el momento de su fallecimiento, ocurrido el 19 de septiembre de 2004. Tanto es así que, según se dijo en el libelo, continuó recibiendo los dividendos, correspondientes a dichas acciones.

Tras la muerte del señor Francisco Eladio, continuaron, su hijo Eladio Jaime Sierra Mejía entró a poseer el título, al igual que las acciones, todo lo cual se extendió hasta el momento de su muerte, ocurrida el 13 de diciembre de 2005. De ahí, en adelante, aseguraron que ellos continuaron con la posesión de esos derechos.

Finalmente, después de mencionar otras acciones intentadas, dijeron que, sumadas la posesiones, éstas abarcan un periodo superior a 10 años, en forma continua y pacífica, por lo que tienen derecho a que se les declare propietarios de las acciones (folios 1 a 3, cuaderno principal del expediente físico).

2.- LA RÉPLICA. Admitida la demanda, conforme auto de 18 de septiembre de 2013 (fl. 98), y notificados los encausados, a través de curador ad litem (fls. 136 y 163), se pronunció ésta desconociendo los hechos de la demanda

y pidiendo que se accediera a las pretensiones, si se acreditaban sus fundamentos (fls. 144, 145, 164 y 165).

3.- LA SENTENCIA APELADA.

3.1.- La decisión de primer grado. Culminada la actuación, ya en manos del Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, éste decidió desestimar las pretensiones, al tiempo que condenó en costas a los actores (ver folio 253).

3.2.- Las motivaciones del Juzgado. Después de describir, definir y comentar los presupuestos de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, así como de la posesión, el despacho aludió a que el tiempo necesario de posesión para la prosperidad de la pretensión es de 10 años, siempre que ese ejercicio haya sido pacífico e ininterrumpido.

Y como en este caso, para arribar al tiempo requerido, se están sumando posesiones, el a quo señaló que el Código Civil permite la adición de éstas, siempre que se acredite la existencia de un vínculo jurídico idóneo entre las posesiones sumadas; que éstas sean cronológicamente continuas; que la posesión de los antecesores sea demostrada, y que las posesiones empalmadas no presenten interrupciones.

Frente al caso concreto, el Juzgado señaló que está demostrado el vínculo jurídico entre las posesiones sumadas, pero la prueba de éstas no era culminante, dado que los testimonios no alcanzaron a evidenciar dicho fenómeno, incluso porque el solo cobro de dividendos no permite colegir actos de señor y dueño, de suerte que no habría prueba de las posesiones que se quieren reunir.

Por otra parte, según la Fiduciaria Bancolombia, la señora Mercedes Marín Vidal figura como titular de las acciones y sus dividendos se encuentran pendientes de retiro. Es más, hay cobros posteriores a la muerte del señor Francisco Eladio, que él evidentemente no podía realizar; luego, no había prueba de la posesión de Sierra Madrid, lo que en manera similar ocurre con el señor Sierra Mejía, puesto que, tener el bien no es constitutivo de ánimo de señor y dueño, ni recibir dividendos, de suerte que apenas era mero tenedor.

Igualmente, si bien no se necesita escritura pública para sumar las posesiones, como lo indicó la Corte Suprema de Justicia, en sentencia cuyo contenido se citó, en este caso se observa el título adquisitivo de las acciones, por parte de los accionantes, derivados de la sucesión de su padre, por lo cual, es claro que ellos demostraron un título jurídico, pero la sumatoria de las posesiones no cumple el término legal, en tanto no hay suficiente evidencia de la posesión de los antecedentes, y como la de los pretensores no alcanza el tiempo requerido legalmente, las pretensiones no podían prosperar (min. 10:20 a 54:20, CD anexo).

4.- LA APELACIÓN.

4.1.- Los reparos concretos de los convocantes. En la audiencia, los demandantes consideraron que se cumplen los presupuestos de la suma de posesiones, y señalaron que la prueba testimonial no había sido bien valorada, dado que conduce a la adición de posesiones (min. 55:17 a 56:04, CD anexo).

4.2.- La sustentación de los cargos. En memorial allegado a esta Corporación, en el término de traslado concedido para sustentar la alzada, los recurrentes expusieron que en el proceso se acreditaron el corpus y el animus de los antecesores, razón por la cual se debió concluir que Francisco Eladio Sierra y su hijo eran verdaderos poseedores del título contentivo de las acciones.

Refirieron que los testimonios de Luz Helena del Carmen Villegas Torres, Carlos Augusto Ramírez Flórez, Andrés Delgado Restrepo, además de las declaraciones de las partes, corroboraron el corpus y el animus de quienes tuvieron el título y que ejercieron actos propios de quien se considera dueño, pues cobrar los dividendos no es labor propia de meros tenedores, incluso por las verificaciones que hacía la Compañía.

Tanto es así que el señor Sierra Mejía quiso cobrar dividendos, sin resultados positivos, pero denotando con esto el señorío que creía tener sobre las acciones. En este orden, adujeron que *“las acciones desplegadas por el señor Sierra Madrid, no pueden equipararse al verdadero propietario, pero tampoco interpretarse a las de mero tenedor, pues como se demostró en la demanda, las actuaciones ejercidas fueron encaminadas a las de un poseedor con animus y corpus”*.

En conclusión, arguyeron que había quedado suficientemente acreditado *“que los antecesores Francisco Eladio Sierra Madrid y Eladio Jaime Sierra Mejía, ejercieron acciones suficientes para demostrar el ánimo y el señorío del título # 0065396 y que si bien, este último, no pudo cobrar los dividendos, si se observó de sus actos el animus domini, prueba de ello fue el trámite ante la justicia ordinaria para pretender la prescripción adquisitiva de las mismas acciones de Argos”*.

Ergo, pidieron revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda (folios 4 a 8, cuaderno de segunda instancia).

III. CONSIDERACIONES.

1.- PRESUPUESTOS PROCESALES. Efectuado el control de legalidad del proceso, la Sala advierte satisfechos los presupuestos procesales, tales como demanda en forma; competencia funcional del Tribunal; capacidad para ser parte, para comparecer al proceso, así como el interés para obrar, tanto por activa como por pasiva. Además, no advierte configurado un vicio genitor de invalidez, ni motivo alguno para abstenerse de resolver de mérito este asunto.

2.- SISTEMÁTICA DE RESOLUCIÓN DE LOS EMBATES. De cara al sistema de pretensión impugnaticia, aplicable en materia de apelación de sentencias, en los términos de los artículos 322 y 328 del Código General del Proceso, establecerá la Sala sí, como lo señaló el a quo, no están acreditadas las posesiones que se pretenden sumar o sí, como lo afirman los censores, hay evidencia de esas posesiones y, en consecuencia, debe accederse a lo pretendido.

Por lo tanto, la prueba de dichas posesiones, al igual que de los demás elementos estructurales de la usucapión serán los temas a verificar en este proveído.

3.- PRESUPUESTOS ESTRUCTURALES DE LA USUCAPIÓN. En los términos del artículo 2518 del Código Civil, mediante la *“prescripción adquisitiva”*, llamada también *“usucapión”*, puede ganarse el dominio de los bienes corporales, muebles o inmuebles, así como los demás derechos reales, si las cosas sobre las cuales recaen los mismos **han sido poseídas** en la forma y durante el tiempo requerido por el legislador.

De ese modo, la prescripción adquisitiva es una **consecuencia de la posesión ejercida previamente por el pretensor**, quien ejecuta actos repetidos y continuos de dominio, durante el tiempo señalado en la norma, transcurrido el cual la posesión se puede convertir en un derecho real, generalmente de propiedad, previo el adelantamiento de un juicio de declaración de pertenencia, que no es más que la prosperidad de la pretensión constitutiva o la adquisición del derecho por prescripción adquisitiva.

Esta posesión puede ser ordinaria o extraordinaria. Se da la primera cuando existe una posesión regular, esto es, cuando hay justo título y buena fe en la adquisición de la posesión (artículo 764 del C.C.), y se ha ejercido durante un tiempo determinado (10 años, reducidos a cinco conforme la Ley 791 de 2002, art. 4). Se tipifica la segunda, cuando, sin título alguno, se posee un bien por un lapso de veinte años como regla general, reducidos a diez, según lo consagrado en la Ley 791 de 2002, artículo 1º.

Ahora bien, en el medio procesal instituido para obtener la declaración judicial de la prescripción adquisitiva de dominio, deben probarse los presupuestos esenciales de la usucapión, a saber:

- a.- Posesión material por el demandante.*
- b.- Que se haya poseído durante el tiempo exigido por la ley. Diez (10) años para el caso de la extraordinaria, o cinco (5) para la ordinaria, contados desde la entrada en vigencia de la aludida Ley 791, en los términos del canon 41 de la Ley 153 de 1887.*
- c.- Que el ejercicio de la posesión haya sido público, pacífico e ininterrumpido.*
- d.- Que se trate de bienes susceptibles de adquirirse por prescripción. O sea, debe tratarse de una propiedad privada, de suerte que no debe tratarse de un bien fiscal, de uso público, o de un bien baldío.*

Adicionalmente, la Jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia ha venido integrando, como requisito de la usucapión, que la pretensión adquisitiva, así como la posesión, con las características anotadas y por el tiempo definido en la normativa, se vinculen a un bien determinado, esto es, la cosa que se quiere adquirir debe estar singularizada, de tal suerte que no se pueda confundirse con otra, incluso para valorar si ésta es susceptible de ser adquirida de este modo.

4.- LA POSESIÓN Y SU PRUEBA. La posesión ha sido entendida como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, la tenga por sí mismo, o por otra persona que la detente en lugar y a nombre de él (art. 762 del C. C).

No obstante lo anterior, para que la posesión sea protegida es necesario que se prueben sus elementos de una manera clara y precisa, es decir, que no quede duda de que el llamado o autodenominado poseedor tiene el corpus y el animus necesarios, entendiendo por el primero el poder físico- material que tiene una persona sobre una cosa, que se refleja en los actos materiales de tenencia, uso y goce sobre ésta, y por el segundo, que es el elemento intelectual o volitivo, es decir, la intención de obrar como señor y dueño sin reconocer dominio ajeno.

En cuanto a la prueba de la posesión, distintas teorías se han erigido, desde la subjetiva que considera que los actos materiales sobre una cosa nada significan si no van acompañadas del elemento intelectual, es decir, que para probar la posesión es necesaria la existencia de voluntad y aprehensión material de la cosa poseída, o dicho de otro modo, la tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño, hasta la objetiva que da preponderancia al corpus y hace presumir el animus, mientras no se demuestre lo contrario; así que, si una persona realiza actos de explotación económica o material en un bien, por ese solo hecho se presume la posesión, aunque, como la presunción que se predica es legal, admite prueba en contrario y los sujetos procesales pueden demostrar que un título, actuación, o la misma ley excluyen la posesión.

De la redacción del Código Civil, al definir la posesión, se infiere que éste sigue la corriente subjetiva al predicar la necesidad de corpus y animus, lo que, sin embargo no es tan claro si se analiza la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, específicamente la casación civil de 3 de noviembre de 1982, con ponencia del Doctor Humberto Murcia Ballén, quien categóricamente afirmó: *“En la prueba de la posesión su elemento intencional (animus rem sibi habendi), justamente por ser subjetivo se presume; es decir, que demostrados los actos materiales constitutivos de la posesión para que a quien los ejecute no sea considerado poseedor, es necesario acreditar que tales actos no han sido realizados con la intención de someter la cosa al ejercicio del respectivo derecho real, que es, en este caso, el derecho de propiedad plena o exclusiva sobre la cosa.”*

Esa presunción referida por la Corte, sin embargo, puede llevar a equívocos; pues, no pocas veces se ve como el hecho de ocupar un inmueble, puede ser revelador de posesión, pero también puede ser de mero tenedor, como sería el de comodatario, al tiempo que realizar mejoras a una casa puede ser acto de posesión, pero también puede ser cumplimiento de un encargo por el propietario, el

arrendador, o el administrador; o puede ser una forma de pago de arriendo, entre otras.

De ahí que la propia Corte, en añosa sentencia de 14 de mayo de 1947, hubiera expuesto, aunque en el marco de una acción reivindicatoria:

“De la acción reivindicatoria responde el poseedor actual de la cosa singular o de la cuota determinada proindiviso de cosa singular materia de aquélla. Si quien la ocupa niega tener ese ánimo, sencillo sería que toda acción reivindicatoria se frustrase, si esa sola negativa del demandado bastara como prueba de la falta de ese elemento sin el cual, como queda dicho, no puede reputársele poseedor, aunque ocupe la cosa, o esté ejecutando en ella actos que, vistos en sí, se supongan posesorios. De otro lado si a esta apariencia se atribuyera desde luego esa calidad, si esos actos hubieran de tenerse por sí solos como prueba de posesión, quedaría identificada con ésta la mera tenencia: Uno y otro extremo son peligro para la justicia. A esquivarlo conduce el análisis de esos hechos, no limitado a su simple materialidad, sino extendido a cuanto revele si efectivamente van acompañados del ánimo de dominio indispensable para que constituyan posesión.”

Y más recientemente expuso:

“Requisito esencial es, para que se integre la posesión, el animus domini o sea el ánimo de señor y dueño, pero como este es un estado mental, síquico, una función volitiva que escapa a la percepción por los sentidos, en tanto que él no se exteriorice por la ejecución de actos de señor y dueño, no de mera tolerancia o facultad, efectuados por el presunto poseedor, es indispensable que ellos se establezcan de manera fehaciente, sin lugar a dudas, para que pueda decirse que la posesión reúne ese esencial requisito.”²

Por lo tanto, más allá de las distintas teorías y diferentes posturas probatorias de la Corte con el correr de los años, lo cierto es que tanto el corpus como el animus deben brotar evidentes, y aunque el segundo es de una incuestionable dificultad, obviamente se puede inferir de actos positivos, propios de quien ejerce dominio o señorío sobre las cosas, pero ese ejercicio lógico no se debe hacer aislado, sino en conjunto para que la sumatoria de acciones permitan derivar, con meridiana claridad, que en efecto confluyen ambos elementos y, por consiguiente, que el detentador es al tiempo, el poseedor de la cosa.

5.- SUMA DE POSESIONES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 778 y 2521 del C. Civil, quien pretende la adquisición de un bien por el modo de la prescripción adquisitiva o usucapión tiene la posibilidad de sumar a su posesión las de sus antecesores, pero ello demanda la satisfacción de una serie de

² Casación Civil de 16 de marzo de 1998. M. P. Nicolás Bechara Simancas.

condiciones legales, por ejemplo, debe demostrar que las varias posesiones se suceden cronológicamente y sin interrupción; recaen sobre el mismo objeto, y están atadas por un vínculo justificativo de adquisición, de suerte que se descarte la posibilidad de usurpación o despojo, tal como lo ha interpretado en reiteradas ocasiones la Corte Suprema de Justicia³.

De ese modo, en el sistema de nuestro Código Civil Colombiano cuando se habla de la venta de una posesión, en realidad se alude a la venta de los derechos derivados del ejercicio de la posesión, entre ellos, la posibilidad material de iniciar una nueva posesión, a la que se puede sumar la anterior para efectos de la usucapión. Así, entonces, quien pretende usucapir tiene la facultad legal de sumar a la suya la posesión de quienes lo han antecedido, pero, desde luego, no basta la simple declaración expresa de la voluntad de sumar a la posesión antecedente por parte del pretensor, pues, se necesita la demostración de las posesiones que se quiere enlazar, además de la existencia de un vínculo jurídico entre la posesión del antecesor y la del demandante, para el reconocimiento legal de la suma de posesiones.

En efecto, reiteradamente ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia:⁴

“[E]l código civil autoriza al poseedor para que sume a la suya la posesión del antecesor, en una institución que podría señalarse como universal, necesaria y facultativa. Ciertamente, casi la totalidad de ordenamientos jurídicos la consagra; después, porque de haberse llegado a exigir que cada quien poseyera por sí durante todo el tiempo necesario para prescribir, la usucapión terminaría tornándose casi imposible, debido a las constantes e incesantes mutaciones a que están sometidos a menudo los bienes, de suerte que, de haberse llevado aquel principio hasta sus últimas consecuencias, produciría la destrucción misma de los efectos bienhechores de la posesión. De tal modo que ella facilita la completación de cortos períodos prescriptivos y protege la posesión en sí. Finalmente, es facultativa en cuanto que el prescribiente será quien decida si le va en mucho en ello, puesto que la posesión que arrime a la suya vendrá con los vicios que tenga.

Pero poseedor así, que quiera sacar ventaja especial, en este caso la de sumar posesiones, expuesto queda para que le indaguen cómo fue que llegó al bien. No le basta el mero hecho de la posesión, porque en ese momento necesitará un agregado, cual es el de justificar el apoderamiento de la cosa. Por eso, hace poco se citaba éste como uno de los eventos en que puede y debe preguntársele en ‘qué tanto derecho’ hace pie su posesión. Dirá así que él es un sucesor de la posesión,

³ Casación Civil del 22 de enero de 1993, en el expediente 3524, con ponencia del Dr. Esteban Jaramillo Schloss.

⁴ C. S. J. Sala de Casación Civil, sent. De 14 de agosto de 1946, G. J. t. LX. Pág. 810. Transcrita en Código Civil Colombiano, edición especial de la Superintendencia de Notariado y Registro.

que posee con causa jurídica. Demostrará ser un heredero, comprador, donatario o cualquier otra calidad semejante; variedad hay de títulos con causa unitiva. Agregaré que no es él usurpador o ladrón alguno. Que allí llegó con 'derecho' porque negoció la posesión con el anterior, manera única como las posesiones quedan eslabonadas, desde luego hablándose siempre de acto entre vivos. En una palabra, que tiene título que los ata. De ahí que el artículo 778, al aludir al punto, rompa marcha tan sentenciosamente, a saber: 'Sea que se suceda a título universal o singular'. Y ya se sabe que suceder es concepto caracterizado por la alteridad, en cuanto une o enlaza necesariamente a un sujeto con otro; sucesor es quien precisamente sobreviene en los derechos de otro; quien a otro reemplaza. Eso y nada más es lo que reclama la ley, vale decir, que se trate de un sucesor.

Por consecuencia, un título cualquiera le es suficiente. Nada más que sea idóneo para acreditar que la posesión fue convenida o consentida con el antecesor. Por ende, a la unión de posesiones no puede llegar quien a otro desposeyó. De tan notable preeminencia no podrán disfrutar ni los ladrones ni los usurpadores. Estos no cuentan con más posesión que la suya. Unos y otros no reciben de nadie nada. Y, claro, así no puede considerarse al usurpador, por ejemplo, sucesor, ni antecesor a la víctima del despojo, toda vez que eliminada de un tajo queda toda relación de causante a causahabiente.

(...)

[E]l sucesor de posesión no tiene que exhibir escritura pública, sino acreditar que no se trata de ningún usurpador o ladrón u ocupante de una cosa, porque precisamente tiene una relación jurídica de posesión frente a su antecesor, vale decir, que el derecho de posesión lo derivó del antiguo poseedor."

6.- CASO CONCRETO. En el evento que ocupa a la Sala, memórese que las pretensiones fueron negadas porque no había evidencia suficiente de las posesiones que se querían sumar por parte de los pretensores, todo lo cual es discutido por lo apelantes, dado que, según ellos, hay prueba de las posesiones y de los actos de posesión ejercidas por ellos y por los poseedores anteriores, dentro de los cuales se encuéntrala el cobro de dividendos de las acciones de Cementos Argos S.A., conforme lo declararon los testigos y se afirmó en las declaraciones de parte.

Así las cosas, como se anticipó en el numeral 2 de las motivaciones, el problema jurídico consiste en analizar la prueba practicada y definir si hay carencia probatoria en relación con las posesiones enlazadas o sí, por el contrario, hay evidencia suficiente de ellas.

Dados a esa tarea, encuentra la Sala que las 8000 acciones referidas pertenecían a quien en vida respondía al nombre de Francisco Eladio Sierra Madrid. Este, según la demanda y como consta en el título (ver folio 14, cuaderno 2), endosó

la titularidad de las acciones a la señora Mercedes Marín Vidal, en una operación realizada el 2 de julio de 1996.

Pese a ese negocio, se dijo en el libelo, el señor Francisco Eladio se mantuvo en poder del título y cobró dividendos, de suerte que Francisco Eladio fue siempre el amo y señor de las acciones, y la cesión simplemente se hizo por manejo tributario, tal como lo expresó el testigo Felipe Andrés Delgado Restrepo (fl. 30, cuaderno 2). O sea que, según la demanda y la versión de los testigos(fl. 27 y 30, cuaderno 2), el negocio de cesión accionaria era simulado, al extremo que la señora Vidal Marín únicamente figuraba para efectos de reducir la carga impositiva del señor Francisco Eladio.

Empero, como este no es un proceso verbal con pretensión de declaratoria de simulación, ni ésta se ha declarado en otro escenario, debe la Sala presumir que el contrato de cesión de acciones es real y genuino, de manera que la propietaria de las acciones es la señora Marín Vidal.

Ahora bien, el único efecto no es el evidenciado en precedencia; pues, si el señor Francisco Eladio cedió sus acciones también reconoció que su dominio pasó a manos de la señora Mercedes, es decir, reconoció dominio en ella. Dicho en otras palabras, si es posible presumir fidedigno ese negocio, también se puede presumir que el señor Francisco Eladio se quiso desprender de la propiedad de las acciones y reconoció como su dueña a la señora Marín Vidal, y es que, se repite, no se puede presumir otra cosa, dado que ese contrato no ha sido sancionado por simulación.

Igualmente, si en un momento dado el señor Francisco Eladio reconoció dominio en Mercedes Marín Vidal, se necesitaba prueba del momento y de la razón por la cual la desconoció y se volvió a considerar propietario de las acciones, vale decir, se requería prueba de la interversión del título. Sin embargo, no se arrimó prueba en ese sentido, ya que, la practicada, únicamente dice que el señor Francisco Eladio siempre fue el propietario de las acciones.

Luego, más allá de la reclamación de dividendos, que fue el centro de la evidencia testimonial aportada, lo cierto es que se necesitaba prueba de la interversión o de la declaración de simulación, pero como ninguno de esos hechos fue acreditado, la posesión del señor Francisco Eladio se observa carente de prueba.

Contrario sensu, se podría afirmar que el señor Eladio Jaime Sierra Mejía si ejerció posesión de las acciones, puesto que tuvo el título accionario en sus manos tras la muerte de su padre, lo que supuso el *curpus* y pudo significar el *animus*, dado que esa circunstancia bien podía generar el convencimiento de ser el dueño del título; además, intentó una acción de pertenencia, como se observa a folios 67 a 82 del cuaderno principal, lo que devela una clara intención de no reconocer dominio ajeno. De ahí que, con referencia a Sierra Mejía, se pueda colegir su posesión.

Y algo similar se puede decir de los actuales demandantes, como así lo entendió el a quo, sin discusión en esta instancia, esto es, se puede afirmar que los demandantes también poseen las acciones, por derivación de su padre Eladio Jaime Sierra Mejía.

El problema es que la sumatoria de ambas posesiones no alcanza los diez años, necesarios para la usucapión, en tanto que, la de Eladio Jaime alcanza 15 meses, contados desde la muerte de su padre, ocurrida el 19 de septiembre de 2004, y se extiende hasta la fecha de su propio deceso, acaecido el 13 de diciembre de 2005.

De ahí en adelante, los convocantes adicionan 7 años, 7 meses y 26 días de posesión, hasta el momento de presentación de la demanda, 9 de agosto de 2013. Ergo, al día de introducción de la pretensión hay evidencia de posesiones sumadas, por espacio de 8 años, 10 meses y 26 días, los que resultan insuficientes para la declaratoria de pertenencia.

IV. CONCLUSIÓN GENERAL.

Por consiguiente, aunque con algunas diferencias en las consideraciones de la Sala, debe confirmarse la sentencia apelada, y como los encausados estuvieron representados por curador *ad litem*, no se impondrán costas en esta instancia.

V. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, SALA DE DECISIÓN CIVIL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE.

PRIMERO. SE CONFIRMA la sentencia apelada, de fecha, procedencia y contenido ya indicados.

SEGUNDO. SIN COSTAS en esta instancia.

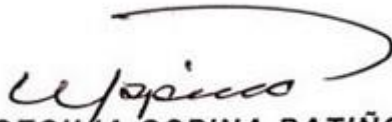
NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado

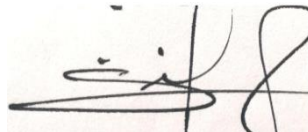
Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022



MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Magistrada

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022



(Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022)

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO

Magistrado